



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control:	Repetición
Demandante:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Demandado:	José Libardo Bohórquez Castilblanco
Radicación:	15 001 3333 004 2019 00208 00

Examinadas las diligencias, el Despacho advierte que carece de competencia para asumir el conocimiento del asunto.

El artículo 7 de la Ley 678 de 2001 definió la competencia para conocer de las acciones de repetición, estableciendo el factor de conexidad para aquellos eventos donde el pago se derive de condenas impuestas dentro de procesos contencioso-administrativos o de conciliaciones u otras formas alternativas de solución de conflictos. La norma señala textualmente lo siguiente:

“ARTÍCULO 7º. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.

Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto.”

Conforme a la norma citada, el conocimiento de la acción de repetición corresponde al Juez que haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código

Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De la misma forma, cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el Juez que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto.

Así, entonces, el factor de conexidad resulta aplicable cuando el pago objeto de la repetición tiene su génesis en una sentencia proferida dentro de un proceso de conocimiento de esta jurisdicción, en una conciliación o cualquier forma de solucionar un conflicto, de manera que los demás eventos no se encuentran subsumidos dentro de esta norma especial, por lo que la competencia habrá de definirse atendiendo a las normas generales previstas para las acciones de reparación directa conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 678 de 2001.

En pronunciamiento emitido el 12 de mayo de 2015, el Honorable Consejo de Estado¹ señaló que el precitado artículo 7º de la Ley 678 de 2001, se encuentra vigente, al no haber sido derogado expresa ni tácitamente por el nuevo ordenamiento procesal.

Se colige, entonces, que cuando se persiga el reembolso de condenas proferidas por esta jurisdicción, o de valores derivados de conciliaciones o cualquier método alternativo de solución de conflictos, la competencia debe definirse de conformidad con el factor de conexidad previsto en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, es decir, que el conocimiento corresponderá al juez que haya tramitado el proceso contencioso administrativo que dio origen a la providencia o que haya impartido la aprobación del acuerdo logrado entre las partes, o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto, según el caso.

Ahora bien, como en el presente caso, la providencia que impuso la condena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja, dentro de la acción de reparación directa número 2011-00141 (fs. 15-21), ese Despacho es el competente para asumir el conocimiento del asunto, de acuerdo con el factor de conexidad, razón por la cual se ordenará la

¹ Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Auto del 12 de mayo de 2015, Consejero Ponente Dr. Hernán Andrade Rincón, Radicado N°. 15238333300220140007501 (52246).

remisión de las diligencias para lo de su cargo, según lo dispuesto en el artículo 168 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja

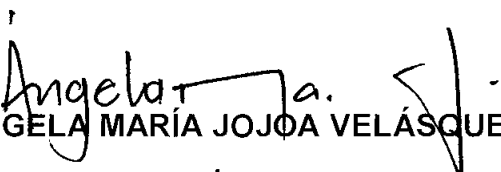
RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que este Juzgado carece de competencia para adelantar el presente proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente providencia, por Secretaría remítase en forma inmediata las presentes diligencias al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, para que el expediente sea remitido al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja, toda vez que este es el competente para conocer del mismo como se mencionó anteriormente.

TERCERO: Dejar las constancias y anotaciones pertinentes en el sistema de información judicial.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

² AMRS.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO N <u>56</u> de hoy <u>20</u> de noviembre de 2019 A LAS 8:00 a.m. FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO
--

² Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 20 de noviembre de 2019 en la página web www.poderjudicial.gov.co. Fereny Mauricio Díaz Hernández – Secretario